

Javier Iguíñez Echevarría\*

En esta síntesis vamos a presentar una interpretación de la crisis actual desde la problemática de los trabajadores organizados; en segundo lugar, una evaluación de las alternativas del gobierno actual y, en tercer lugar, varias propuestas para un nuevo curso, inmediato y de largo plazo, de la economía peruana.

## I. Crisis mundial y nacional: su impacto en los trabajadores.

La crisis económica en la que nos encontramos desde hace más de una década (1) tiene muchos efectos en la sociedad peruana. En las líneas que siguen vamos a concentrarnos solamente en aquellos que afectan más directamente a los trabajadores asalariados. La conclusión de este primer capítulo va a ser que la crisis ha cambiado la sociedad peruana, y en especial el mundo de los trabajadores, de una manera bastante drástica. Nuestra crisis y la del mundo tienen que cambiar también nuestras maneras de pensar el Perú y las tareas a la orden del día. Las perspectivas de la sociedad peruana surgen de esta nueva situación y las tareas económicas de los trabajadores tienen que tomar en cuenta el nuevo punto de partida, resultado de la crisis actual.

Las perspectivas de más largo plazo van a estar marcadas por la continuación de un escenario internacional básicamente hostil a la economía peruana. Cuando el momento actual de proteccionismo, elevación de tasas de interés y endeudamiento va ya pasando como consecuencia de la revolución tecnológica mundial, actualmente en sus inicios, y de la consecuente reactivación mundial, los problemas para la economía peruana no habrán acabado. Las nuevas tecnologías irán destruyendo rápidamente todas aquellas actividades productivas que no se hayan actualizado a tiempo y ello ocurrirá a través de la reducción de precios de muchos productos, de la incorporación de nuevos productos en el mercado y en las aspiraciones populares, de la inversión directa, de otros medios económicos y de diversos instrumentos políticos

\* Profesor de la Universidad Católica, Investigador de DESCO, Presidente de la Comisión de Plan de Gobierno de I.U.

e incluso militares como tantas otras veces ha ocurrido en la historia. A los efectos negativos de la actual destrucción de capital a nivel mundial le sucederán los efectos negativos de la construcción del capital nuevo y más competitivo.

La ley de la competencia es una ley de guerra económica y el capitalismo peruano no se preparó, ni se prepara en la actualidad, para enfrentarla. Los sectores populares, y los trabajadores organizados en particular, ni toman en cuenta esta situación ni sacan las consecuencias correspondientes esperando, en la práctica, que los capitalistas o las burocracias del Estado lo hagan. No se dan cuenta que las posibilidades de su supervivencia y del progreso de sus hijos depende en gran medida de que ellos mismo asuman nuevas responsabilidades directas que van desde aquellas que corresponden al destino productivo de sus centros de trabajo hasta las tareas económicas propias de la lucha por la soberanía nacional. Ninguna responsabilidad puede ser evadida por los trabajadores del país, y menos aún, por los trabajadores organizados en el movimiento sindical peruano. Así, en líneas que siguen empezamos a responder positivamente a la valiente negación de José Carlos Mariátegui que preside esta Conferencia Nacional.

"Un proletariado sin más ideal que la reducción de las horas de trabajo y el aumento de los centavos de salario, no será nunca capaz de una gran empresa histórica".

#### 1.- La crisis aumenta la desigualdad entre las clases.

En primer lugar, debemos señalar que la crisis ha acercado el nivel de ingreso de los trabajadores del campo y de la ciudad. Antes de la crisis el sector más perjudicado de la economía peruana fué el campesinado. El ingreso del campesino bajó de 21.1% del ingreso nacional en 1950 a 8.1% en 1973. Entre esas fechas las ganancias capitalistas pasaron de 18.0 a 22.3% pero el crecimiento de la economía también elevó el salario real de los trabajadores y el empleo salarial aumentando el porcentaje de los sueldos y salarios en el ingreso nacional de 38.0% a 48.9%.

Desde que en 1973 comienza la crisis para los asalariados esta diferenciación creciente entre los trabajadores del campo y de la ciudad se reduce y la clase capitalista se convierte en la única beneficiaria de la situación por la que pasa la economía nacional. En 1984, tras once años de crisis, las remuneraciones bajan a 22.8% del ingreso nacional mientras que las ganancias de las empre-

sas suben a 35.8%. La crisis beneficia relativamente a los capitalistas y perjudica a los asalariados. Pero también beneficia y perjudica absolutamente. Las ganancias reales aumentaron 51.9% entre 1974 y 1984. Las remuneraciones reales bajaron 27.3%. La crisis es fundamentalmente antilaboral.

Las perspectivas estratégicas para el Perú son todavía de crisis. Mientras domine la lógica capitalista las perspectivas serán de creciente desigualdad entre capitalistas y trabajadores asalariados.

2.- La crisis acerca en la miseria a los trabajadores del campo y la ciudad.

El deterioro del nivel de vida de los asalariados ha arrastrado a los trabajadores independientes. Al descender las remuneraciones, la capacidad adquisitiva de los asalariados desciende y los independientes urbanos pierden mercado e ingreso. Cuando además aumentan los despidos, el número de independientes populares también aumenta incrementándose la competencia que resulta de un mayor número de vendedores de bienes y servicios en un mercado menor. La pobreza en las ciudades aumenta. Por ello, mientras en 1973 el 65.4% de la fuerza laboral agropecuaria estaba subempleada y sólo el 23.3% (uno de cada cuatro) de la fuerza laboral no-agropecuaria (sobre todo urbana) estaba en esa condición, en 1985 las cifras correspondientes son 60.4% para la agropecuaria y 50.5% (uno de cada dos) para la no-agropecuaria. Mientras el porcentaje de subempleados entre los trabajadores no agropecuarios se ha más que duplicado, el subempleo existente entre los trabajadores del mundo agropecuario ha descendido ligeramente. Además como sabemos el desempleo ha aumentado sobre todo en las ciudades; en 1973 era de 7.1% (uno de cada catorce) de los trabajadores no-agropecuarios y en 1985 de 18.5% (uno de cada 5).

Los llamados "adecuadamente empleados" por las estadísticas oficiales, que son los que aproximadamente ganan más que el salario mínimo, doce años atrás, en 1973 eran el 69.6% entre los no-agropecuarios (dos de cada tres) y el 34.3% entre los trabajadores del mundo agropecuario. En 1985 eran el 31.1% (uno de cada tres) entre los trabajadores no-agropecuarios, lo que quiere decir que uno de cada tres trabajadores pasó de ser "adecuadamente empleado" a ser "subempleado". El porcentaje de los "adecuadamente empleados" entre los trabajadores agropecuarios-

era el 39.3%. La ligera mejora de los campesinos se debe a que la migración redujo la fuerza laboral dedicada a la actividad agropecuaria, y parte del deterioro de los trabajadores de las ciudades se debió a esa misma migración.

Las cifras revelan que la crisis golpea fundamentalmente a la ciudad y - que la agricultura es más resistente a la crisis que las actividades no agrícolas. Esto pone en evidencia que la gran crisis actual es una característica propia del mundo capitalista. Además, también pone en evidencia que la caída salarial afecta a los demás sectores populares de la ciudad.

Las perspectivas de crisis en las que todavía se encuentra encerrada la economía peruana tenderán a profundizar la pobreza urbana general y no sólo la de los asalariados. Esto genera una tendencia a igualar "por abajo" a los pobres - del campo y de la ciudad. La vieja situación de miseria rural permanece mientras el ciudadano urbano retrocede de los niveles de vida conquistados. La menor velocidad de la migración a la ciudad, resultante de la crisis económica no logra alterar esta evolución. Aún en medio de la grave crisis de las ciudades el atractivo de estas para la juventud supera a las ventajas actuales y futuras de quedarse en la tierra natal. Nuevamente, las perspectivas bajo una lógica capitalista son de inmiseración y desamparo. El deterioro de la situación económica general en - la sociedad actual lleva, como sabe muy bien el asalariado, al desamparo total, a la lucha encarnizada por sobrevivir, y muchas de las veces a la enfermedad innecesaria, a la muerte prematura de los seres queridos, a la desesperación y a toda - clase de conductas delincuenciales e irracionales. La perspectiva es pues, de - violencia sobre el trabajador peruano; sea ésta silenciosa y estructural, sea pública y sangrienta.

### 3.- Crisis de remuneraciones y de empleo en la producción.

Las cifras anteriores nos muestran la caída de la participación de los - trabajadores asalariados en el ingreso nacional. También el deterioro agudo de - los trabajadores de la ciudad y la resistencia de los trabajadores del campo. Esa participación ha descendido por dos razones: la caída en el salario real y la caída en el empleo. En un primer momento de la crisis, la que se registra entre 1973 y 1978, las remuneraciones caen sustancialmente pero el empleo se eleva. En

la segunda caída drástica, entre 1981 y 1985, tanto las remuneraciones como el empleo descendieron.

Esta evolución tiene gran importancia para entender los flujos y reflujos de la combatividad sindical. Mientras el deterioro es de las remuneraciones pero el empleo sigue mejorando, la fuerza sindical aumenta y la represión contra ella normalmente también. La historia de los años 70 atestigua esta evolución. Cuando al deterioro de las remuneraciones se une el del empleo, el natural temor al despido invade a la clase obrera y la resistencia sindical al deterioro de las remuneraciones se hace menos masiva. La historia de los años 80 corrobora esa hipótesis.

En la actualidad, la reactivación de la producción y del empleo fortalece al movimiento sindical y permite rápidas respuestas cuando comienza el deterioro del salario. El Paro del 19 de Mayo (1987) parece corresponder a esa nueva situación. Las perspectivas de corto plazo del movimiento sindical están determinadas en primer lugar, por la reactivación actual de la economía y, en segundo lugar, por el éxito en la lucha por la estabilidad laboral que, a su vez, es más probable en un proceso de reactivación. La actual reactivación continuará un tiempo más si se empieza a reducir efectivamente el pago de la deuda externa, si se reduce efectivamente la remisión de utilidades al exterior y la fuga de capitales por el sector privado y por altos funcionarios del sector público, si se logra un mayor coeficiente de inversión sustitutiva de importaciones y exportadora.

A más largo plazo, la continuación del crecimiento depende de una transformación más estructural de la economía peruana, de su mayor articulación interna, de una mayor productividad industrial, capaz de ampliar el mercado interno abaratando productos y elevando salarios y capaz de vender en cualquier mercado del mundo. Muy poco se ha avanzado en los años recientes en esta dirección.

#### 4.- Crisis de la relación capital-trabajo

La crisis es capitalista y por esa razón destruye las organizaciones basadas en la relación capital-trabajo asalariado que no resisten la competencia. Como el Perú es un país de baja productividad y débil capacidad competitiva internacional, salvo en los casos en los que se extraen ricos recursos naturales, la

destrucción producida por la crisis es importante. El Estado cuanto menos nacionalista es, menos impide esa destrucción. La crisis, ayudada por el Estado antipopular, ha contribuido a reducir el porcentaje de asalariados en la fuerza laboral peruana. El máximo porcentaje alcanzado se registró en 1974-5 cuando el 41.0% de la fuerza laboral era asalariada. Desde entonces la proporción ha bajado sostenidamente, incluso durante la débil reactivación de 1979-1981. En 1984 el porcentaje llegó a 32%.

Esta enorme reducción de la parte de la fuerza laboral que es asalariada se debe, en primer lugar, a la debilidad del capitalismo peruano. La crisis la ha puesto en evidencia. Pero esa debilidad es, a su vez, fundamentalmente debida a la baja productividad de la mayor parte del aparato productivo capitalista en el Perú. Así como el capitalismo en sus momentos de expansión crea dialécticamente las condiciones para el fortalecimiento del asalariado existente, y crea y expande el nuevo asalariado; así también, en las épocas de crisis lo debilita, destruye y contrae. En las grandes crisis del capitalismo, como es la actual, ello se hace claramente evidente en la debilidad del movimiento sindical a nivel mundial, en la derrota electoral de los partidos más apoyados en el movimiento obrero, en el triunfo de los políticos más conservadores y antisindicales.

Pero esa debilidad no es sólo económica. Encima de ella, y en parte gracias a ella, se establece la dominación política. La subordinación política al imperialismo convierte a los propios gobiernos burgueses en fáciles verdugos del débil capitalismo nacional. La experiencia en las dos "segundas fases", la del gobierno militar y la de Belaunde lo pone en evidencia.

Las perspectivas inmediatas del desarrollo de la relación capital-trabajo están determinadas por la postura efectiva del país frente a la deuda externa y a la fuga de capitales.

Un resultado de esta evolución es la debilidad de los proyectos capitalistas transnacionales para los países subdesarrollados. El origen y epicentro de la crisis está en el corazón del capitalismo mundial; pero la mayor destrucción tiende a ocurrir en los países cuya capacidad productiva y competitiva es menor, cuyas industrias son más obsoletas, cuya ineficiencia es mayor. Tal es el caso de los países con una importante economía capitalista subdesarrollada y, más aún, cuando-

estos países abren sus mercados a la competencia internacional tal como lo recomiendan los organismos internacionales dominados por los productores y países más poderosos. Frente a esa situación, los capitalistas que necesitan protección de su mercado nacional para sobrevivir se levantan y apoyan las iniciativas políticas nacionalistas, y la burguesía más débil puede enfrentarse a la más fuerte y capaz de sobrevivir en un terreno de crisis y agresiva competencia hostil. En el Perú esa burguesía fuerte lo es fundamentalmente por la calidad de los recursos naturales que explota y no por su capacidad tecnológica innovadora y su audacia comercial. Por otro lado, cuanto mayor sea la calidad de los recursos naturales explotados más competitiva es la producción y más resistente puede ser el movimiento laboral sindical. Más persistente puede ser, en consecuencia, el conflicto laboral. En el extremo opuesto, al agotarse las minas, al bajar la calidad del recurso natural extraído y la competitividad, el conflicto se desarrolla hasta los heroicos niveles que todo Lima conoce directamente gracias al tesón y sacrificio de las mujeres y trabajadores mineros. Sin embargo, la radicalidad de la lucha coincide con la inviabilidad productiva capitalista. De ahí que en esos momentos los trabajadores exijan la propiedad de la empresa en quiebra para prolongar su vida útil y el empleo. En pequeña escala, esa es la experiencia de centenares de trabajadores en las Empresas Administradas por los Trabajadores. En mayor escala todavía, esa es la tragedia actual del sindicalismo minero boliviano.

##### 5.- Perspectivas de la industria nacional.

Pero en el Perú hay diferencias importantes entre los diversos sectores de la producción y, en consecuencia, diferencias también importantes en la solidez del empleo, en la resistencia empresarial y sindical a la crisis. Pongamos algunos ejemplos de esta diferenciación.

El sector manufacturero es, en conjunto, el más débil frente a la competencia internacional porque es menos productivo que la industria extranjera (tiene desventajas absolutas frente a ella) y porque los costos de transporte de los productos industriales importados los encarecen relativamente poco, no sirviendo, en consecuencia, como protección automática de la producción nacional. Por eso - en Chile, donde han abierto el mercado interno a la competencia internacional la-

desindustrialización ha sido mayor. En el Perú se sintió ese efecto destructivo de la crisis entre 1979 y 1981 cuando el equipo Silva Ruede-Moreyra primero y Ulloa-Abusada después, empezaron a abrir el mercado interno a los productos industriales extranjeros. En otros momentos, como por ejemplo entre 1976-78 y 1982-85 la crisis no viene directamente "por fuera" bajo la forma de importaciones invasoras (que Marx llamaba la artillería ligera de la competencia capitalista) sino que la paralización industrial parece venir del deterioro del sueldo y salario reales y de la consecuente falta de demanda interna. Pero, ¿Porqué bajan los sueldos y salarios reales? En el Perú, ese descenso está estrechamente relacionado a la subida acelerada de los precios y ésta, a su vez, ocurre generalmente cuando se acelera la devaluación de nuestra moneda nacional dejando atrás por un momento a la inflación interna.

Pero ¿Porqué hay que devaluar? La razón de fondo está en la baja productividad y competitividad de la industria nacional. Así llegamos, dando un rodeo, a la hipótesis anterior sobre las políticas "aperturistas". Cuanto más extendida sea la industria no competitiva más devaluación e inflación hay. Así vemos que, existe más devaluación e inflación en Argentina, Brasil y Chile donde la industrialización es mayor que en los países centroamericanos donde la industrialización no-competitiva es menos extendida. El Perú, con Colombia, está en una situación intermedia de inflación y devaluación. La devaluación de la moneda nacional respecto de la moneda mundial depende fundamentalmente del desarrollo de las fuerzas productivas de esa nación respecto de ese mismo desarrollo en las naciones cuya producción lidera la economía mundial. En otros términos, depende en primer lugar de la relación entre el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía en el Perú y el necesario para producirla en el mundo capitalista más desarrollado y dinámico. En última instancia, la devaluación y la inflación no resultan de QUIEN PRODUCE (Sean monopolios o "competitivos", nacionales o extranjeros, grandes o pequeños, etc.); tampoco de CUANTO SE PRODUCE (oferta y demanda, pocas exportaciones, etc.) o de CUANTOS BILLETES SE IMPRIMEN. En el fondo, depende sobre todo de COMO SE PRODUCE, de si se produce eficientemente o no, de si se produce cada vez más cercanamente a, o más alejadamente de los niveles de productividad predominantes a nivel mundial. La gran crisis actual pone sobre el



tapete asuntos más estratégicos que los cambios en la propiedad o en las exportaciones o en la política de ajuste macroeconómico estatal. Todos estos asuntos son importantes pero tienen que estar dirigidos a cambiar la MANERA DE PRODUCIR EN EL PERU. Este es el reto estratégico que tiene que asumir quien pretenda dirigir el país y llevarlo a buen destino en medio de la crisis económica con revolución tecnológica actualmente en curso. La perspectiva de la clase obrera y de los asalariados en general frente a este problema se deberá diferenciar de la perspectiva burguesa por la prioridad asignada a GARANTIZAR la satisfacción de las NECESIDADES BASICAS DE TODO EL PUEBLO por medio de la PARTICIPACION DEMOCRATICA POPULAR en todas las instancias de responsabilidad y decisión que sean necesarias. Pero, es necesario insistir, en la actual crisis no hay salida nacional y popular que se concentre exclusivamente en la redistribución, sea de propiedad o de ingreso, sin alterar el curso tradicional de abandono del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo amparados en la calidad de los recursos naturales, en la gran inversión foránea y en la falta de competencia y control de calidad.

Dentro de la industria también hay diferencias. La más importante es la que existe entre las unidades productivas que tienen alta productividad y/o dominio de algún recurso poco común en el mercado mundial, como ciertos tipos de algodón, de lana, de pescado, etc. Y, las que no tienen ninguna de estas características y sobreviven gracias a la protección del mercado interno por el Estado. En las primeras, la relación social capitalista es fuerte y el movimiento sindical asociado a ella también puede serlo con relativa facilidad. Ni la una ni el otro dependen tanto del rol protector del Estado. Más bien, esas actividades son fundamentales para que el Estado obtenga ingresos en moneda extranjera y capacidad para estimular el crecimiento de toda la economía. En las segundas, por el contrario, las empresas tienen poca productividad y necesitan protección; y como además, en el Perú no hay una industria de bienes de capital, necesitan divisas ajenas para importar maquinaria e insumos. Son totalmente dependientes del Estado. Tanto la baja productividad como la ausencia de articulación inter-industrial contribuyen a esa dependencia. Entre ellas, a su vez, las más débiles son las que ofrecen productos cuya demanda varía mucho y se re-

duce enormemente durante las crisis. Tal es el caso de la industria metalmecanica: la de más rápida reactivación pero la de más drásticas caídas y crisis. Las dificultades de la FIETEMP para resistir la crisis no son independientes de esta situación de baja productividad, gran necesidad de divisas y gran reducción del mercado interno y del empleo metalmecanico.

Las perspectivas económicas de estos sectores, relativamente más débiles de nuestra economía, son negras en un contexto de crisis como el actual y -- son peores las perspectivas si dominan las prácticas empresariales dirigidas -- simplemente a mantener las empresas aprovechando la demanda existente pero sin generar nuevas industrias. La protección existente, la disponibilidad de divisas producto de la crisis final del gobierno de Belaunde, la política de precios y salarios destinada a elevar la demanda interna, la reducción de los precios relativos de servicios públicos y de productos claves como la gasolina que sacrifican la rentabilidad empresarial pública y los ingresos fiscales, la reducción de la presión tributaria no han tenido como resultado generar nueva capacidad de autosustentación.

Durante 1987, la continuidad del programa de reactivación tras el bache del primer semestre de 1987 es más difícil en diversos sentidos. La disponibilidad de capacidad instalada es menor, la de recursos fiscales también; la holgura de las empresas públicas es claramente inferior a la de hace dos años, -- las tasas de interés pueden reducirse menos, etc. Por lo tanto, el aliento de la reactivación renovada requerirá una presión política excepcional para lograr que los empresarios, adiestrados ya en evadir las reglas de juego sobre los precios, se disciplinen; una puesta en marcha efectiva de la política del "10%" sobre la deuda externa; una racionalización y poda en las empresas públicas para que resistan el rol de freno inflacionario; una mayor cautela en el gasto público y una elevación de la presión tributaria sobre los sectores de más altos ingresos. En resumen, la reactivación del aparato productivo ineficiente y "dolar-adicto" es cada vez más costosa en términos de enfrentamientos hacia adentro y hacia afuera y todo para meramente sostener el empleo en una estructura industrial inerte y sin viabilidad de largo plazo con la esperanza de que el sector empresarial privado considerará necesario ampliar su capacidad instalada,

que lo hará en la magnitud necesaria y en los sectores y actividades con mayores déficits; que aumentará su productividad, que sustituirá importaciones y abastecerá a los sectores mayoritarios. En este intento y en esta confianza se apoya la estrategia industrial del gobierno.

Las perspectivas inmediatas de la economía están fuertemente determinadas por el comportamiento empresarial privado. La estrategia del gobierno de García ha sido pasar por varias etapas, una detrás de la otra. Se iniciaron con el programa antinflacionario; en segundo lugar se decidió crecer; en tercer lugar, confiar en la inversión privada conforme se acercaba el pleno uso de la capacidad instalada. Si el empresariado no invierte, la economía peruana entra, con toda seguridad, en rápido colapso. Si invierte masivamente en la ampliación de la actual capacidad instalada se posterga la limitación para el crecimiento que proviene de la limitada capacidad productiva actual pero se gastan antes las divisas existentes al aumentar las importaciones. El resultado sería la imposibilidad de utilizar la nueva capacidad productiva por falta de divisas.

¿Está logrando el gobierno aprista la inversión necesaria?. Las cifras existentes no son suficiente evidencia de que la inversión es la suficiente y menos aún que es la necesaria. Si bien las importaciones de bienes de capital han aumentado apreciablemente, como se resume en el Cuadro 4, hay que señalar que, en primer lugar, la base de comparación es bastante baja, en segundo lugar, que puede haber un apreciable componente de sobrefacturación de maquinaria con la finalidad de sacar capitales del país y, en tercer lugar, que la calidad de la importación en términos de su potencialidad sustitutiva y/o de su potencialidad exportadora no es conocida al no haber proyectos conocidos en marcha ni registro de lo que ha sido importado.

El futuro inmediato del país esta dependiendo de la cantidad y calidad de las importaciones actuales y las que se realicen en el futuro más inmediato. Durante el primer año de gobierno, el crecimiento productivo y la utilización de divisas ha sido destinada al aumento del consumo pero no, a la vez, al de la inversión.

Por otro lado, la desconfianza del gobierno en el aparato productivo estatal hizo que no se iniciaran inversiones públicas o fórmulas mixtas de inversión en sectores que están ya teniendo limitaciones y que van a llevar en corto plazo a aumentos innecesarios de importaciones; tal es el caso de la industria siderúrgica, del cemento y la de fertilizantes entre otras. La actividad reguladora asignada al Estado por el gobierno actual no se ha expresado en claras orientaciones ni para exportar, ni para sustituir importaciones de bienes de consumo, ni para invertir en bienes de capital necesarios. Ninguna nueva fábrica importante se ha iniciado en los dos años transcurridos. Las previsibles necesidades populares no han determinado planes perentorios de inversión pública o mixta mientras la economía empezaba a crecer. Según el gobierno, había que esperar a que la rentabilidad privada y la utilización plena de la capacidad instalada determinaran en que, cuándo y cuánto invertir. El gobierno de García ha confiado totalmente en el sector privado para resolver el problema económico inmediato. El problema consiste además en que, dada la disponibilidad de divisas, el gasto de ellas necesario para crecer hasta las cercanías de la capacidad instalada existente reduce esa disponibilidad hasta el punto de deteriorar la confianza del inversionista privado. Cuando se espera, entonces, la inversión privada es cuando ya las reservas están cayendo y el empresario no tiene seguridad sobre el crecimiento futuro. De ese modo, el mismo proceso que crea la necesidad de invertir, reduce las expectativas de crecimiento futuro y la voluntad capitalista de llevar a cabo la inversión. El gobierno ha cosechado sin sembrar y la semilla esta desapareciendo.

Frente a esta situación, los trabajadores son conscientes de la necesidad de defender el mercado interno para mantener el empleo pero, como hemos señalado, el problema es más estructural. Mientras la productividad no aumente suficientemente, resulta indispensable invertir con gran racionalidad en la articulación de la estructura productiva nacional de modo de reducir importaciones y crear nuevos centros de trabajo y de aprendizaje tecnológico. Pero, a la vez, resulta imprescindible determinar el tipo de producción necesario para satisfacer necesidades efectivamente populares y no las del 5% de ma

yores ingresos en el país. Todo esto coloca en la agenda el problema de la generación y retención en el país de los excedentes invertibles pero también el problema de la efectiva inversión de dichos excedentes. El gobierno ha confiado exclusivamente en los incentivos y mecanismos de mercado para resolverlos. Ni la planificación estatal ni la supervigilancia laboral han sido instrumentos al servicio de estos objetivos fundamentales. El resultado no permite alimentar expectativas de crecimiento con bienestar popular a mediano plazo.

#### 6.- Perspectivas del sector exportador tradicional.

Pero no todos los sectores productivos y laborales peruanos son tan frágiles como el industrial dirigido al mercado interno. Algunos, como el minero tiene buen número de centros de trabajo que, gracias a la calidad de los recursos naturales que extrae, resisten bien la competencia extranjera y las reducciones de precios. Además, en estos sectores primarios de la actividad económica las crisis se manifiestan como descensos de precio y no como reducción de la utilización de la capacidad instalada y del empleo como sí sucede en el caso de la industria. Por eso el debilitamiento sindical, que normalmente viene con el desempleo, es menor.

En este sector, la competencia entre capitalistas de todo el mundo hace que las minas menos eficientes cierren cuando los precios de los minerales bajan debido a la crisis mundial. Pero el impacto de la crisis sobre el empleo en las minas que compiten ventajosamente a nivel internacional es menor, por su eficiencia tecnológica y administrativa y, sobre todo, por la calidad de los recursos naturales. De ahí surgen las bases materiales de la capacidad del movimiento sindical minero para mantener más o menos intacta su combatividad.

El empleo salarial, es también resistente, incluso durante las crisis, cuando el empresario tiene una responsabilidad por el problema del empleo global del país y su prestigio depende de mantenerlo. Es el caso de las empresas estatales. Por eso, en ellas el empleo dura más de lo que duraría bajo régimen privado. Además, las empresas estatales pueden funcionar a tasas de

ganancia menores que las privadas e incluso obtener apoyo financiero de largo plazo del resto de la economía y funcionar a pérdida por un cierto tiempo sin desemplear a sus asalariados. El movimiento sindical, si está bien organizado, puede aprovechar estas circunstancias y obtener aumentos mucho mayores que los del producto por trabajador. Tal es el caso de CENTROMIN desde su estatización. En este caso, además, se generan divisas que el Estado aprecia por lo que valen para el crecimiento de la economía nacional y no sólo por la rentabilidad que le permiten. Ello es lo que hace que, aún perdiendo en la empresa, las divisas que se generan permitan el crecimiento del resto de la economía y el Estado recupere por la tributación general lo que pierde en la empresa exportadora. De ese modo, un país puede exportar a pérdida y, a la vez, beneficiarse. El movimiento sindical todavía tiene una base material aprovechable para afirmar sus reivindicaciones salariales y lograr la defensa del sustento familiar pero olvida la precariedad a mediano plazo del empleo de sus afiliados y del servicio que realizan al país produciendo divisas. La empresa ya entonces vive con suero. Un sector productivo nacional de alta calidad productiva se va perdiendo sin conciencia de ello.

Aún así, en casos de crisis prolongada o definitiva, cuando las pérdidas son sistemáticas, incluso el Estado tiene que recurrir a fórmulas que reduzcan las pérdidas continuas y crecientes. El resto del país se resiste, consciente o inconscientemente, a respaldar la continuación de la actividad productiva ineficiente y se inician políticas de racionalización empresarial que corroen el empleo y pueden debilitar la eficiencia gremial del sindicato. Debemos recordar nuevamente la situación de la minería y del proletariado bolivianos. Mientras el país contrarresta la baja productividad, las empresas estatales tienden a olvidar la necesidad de invertir, de racionalizar y de reducir el robo y la fuga de capitales propios de las grandes transacciones internas, y sobre todo, externas. De ese modo, se debilita la estabilidad futura del empleo en la empresa y la provisión de divisas para el conjunto de la economía nacional. Todos los trabajadores, los de la empresa en primer lugar, y los del resto del país después, son los principales perjudicados por la irresponsabilidad en la administración de los recursos del Estado. Ya hemos señalado antes cómo la recesión perjudica principalmente a los asalariados.